

1º La Justicia de la Nación no ampara ni protege al súbdito inglés William H. Walker, contra las órdenes de arresto dadas por el Juez 1º local de Hermosillo, por no violarse con ellas en la persona del quejoso ninguna de las garantías que le otorga la constitucion.

2º Notifíquese, publíquese en el periódico del Estado, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Fernando M. Astiazarán, Juez de Distrito de Sonora, así lo decretó definitivamente firmando con los testigos de su asistencia ordinaria.—*Fernando M. Astiazarán.—A. P. del Rincon.—A.—P. A. Piña.*

Es copia que certifico.—Guaymas, Agosto 8 de 1874.—*Fernando M. Astiazarán. A.—P. del Rincon.—A.—P. A. Piña.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por el súbdito inglés William H. Walker, contra el Juez 1º local de la Ciudad de Hermosillo, por haberlo puesto en prision por deuda puramente civil, segun dice el quejoso, por lo cual cree vulnerada en su persona, la garantía á que se refiere el art 17 de la Constitucion general; y

Considerando: que en el expediente aparece, que es falso el hecho de que se queja Walker; pues la causa por lo que fué puesto en prision, es la de haber faltado al respeto debido á la autoridad del Juez 1º local de Hermosillo, y que al imponer al quejoso la prision, obró dentro de la órbita de sus facultades; de conformidad con el art. 101 de la Constitucion General, se decreta:

1º Que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á ocho de Agosto último, por el Juzgado de Distrito de Sonora que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al súbdito inglés William H. Walker, contralas órdenes de arresto dadas por el Juez 1º local

de Hermosillo, por no violarse con ellas en la persona del quejoso, ninguna de las garantías que le otorga la Constitucion.

2º No se le impone la multa á que se refiere la ley de 20 de Enero de 1869, en atencion á su insolvencia.—Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.—Asi por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que fomaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.—M. Auza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis Mº Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico.—México, Diciembre 5 de 1875.—*Luis Mº Aguilar, secretario.*

AMPARO.

Promovido por el C. Sebastian Berra en representacion de D. Francisco Barton, ante el Juzgado 2º de Distrito de esta capital, contra los procedimientos del juez 3º de lo civil de esta ciudad, que mandó sacar á remate la fábrica de San Ildefonso y rancho anexo.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano juez 2º de Distrito.

El promotor fiscal dice: que en la notificacion que se le hizo al agente de negocios D. Sebastian Berra, del auto fecha 17 del corriente, contesta que no habiendo tenido verificativo el arreglo que motivó la suspension del presente recurso de amparo, inter-

puesto por dicho Berra, en representacion de D. Francisco Barton, insistia en el juicio.

El estado que éste guardaba cuando se suspendió, era ya el de tomar apuntes para alegar; haciéndolo el que suscribe, reproduce en todas sus partes los fundamentos de que se hizo mérito en su pedimento último que corre de la foja 26 á la 28 vuelta de este expediente, y como consecuencia de dichos fundamentos, pide al juzgado como entónces, se sirva declarar:

«Que la justicia de la Union, protege y ampara al representante de D. Francisco Barton, contra la sentencia del juzgado 3º de lo civil de esta capital, que mandó se verificara nueva almoneda de la fábrica de San Ildefonso y rancho anexo, con deducion del veinte por ciento de su valúo, por importar éste acto, una violacion del art. 14 de la Constitucion.»

México, Octubre 27 de 1874.—*J. Biviano Beltrán.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México Noviembre 14 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por el C. Sebastian Berra, á nombre de D. Francisco Barton, á virtud de reputar violadas en la persona de éste, y con los procedimientos del juzgado 3º de lo civil en el remate de la fábrica de San Ildefonso y rancho anexo, las garantías que consignan los arts. 14 y 27 de la Constitucion; visto el informe con justificacion rendido por el ciudadano juez 3º de lo civil; las pruebas y alegatos del quejoso; lo pedido por la parte fiscal y visto en fin lo que verse debia; atendiendo á que la violacion de garantías en el caso, se hace consistir, en que siendo, tanto los contratos, origen de los adeudos del quejoso y para cubrir los cuales se ha procedido al mencionado remate, como la formacion del concurso, anteriores á la promulgacion del código de procedimientos, al

hacerse hoy aplicacion de este contra el quejoso, se violan los artículos constitucionales 14, por la retroactividad efectuada con tal procedimiento, y 27 por la expropiacion que sin causa de utilidad pública y sin previa indemnizacion se ejecuta con el acto reclamado; y Considerando 1º: que la retroactividad á que se refiere el repetido art. 14 y que se halla consignada como garantía individual, consiste en que derechos legítima y anteriormente adquiridos se destruyan ó varien por ley posterior en perjuicio de las personas objeto de ella; ó que se juzgue y sentencie por hechos anteriores con aplicacion de ley posterior: que en el presente juicio se halla comprobado y se alega, que con anterioridad al código hoy vigente para procedimientos, esto es, en el año de 1871, Don Francisco Barton hizo cesion de bienes y en consecuencia y admitida esta, celebró un cuasi-contrato del que naciendo obligaciones y derechos, adquiridos como fueron estos legítimamente, no han podido variarse por ley posterior, lo que sin embargo ha tenido lugar con el procedimiento del juzgado 3º, puesto que el quejoso tenia el derecho á que los bienes cedidos se vendieren judicialmente para pago á sus acreedores; pero con arreglo á las leyes vigentes al hacer la cesion, leyes que no designaban deducion del diez por ciento como lo determina el actual y ya citado Código: que los derechos del quejoso se atacan ó perjudican con las deducciones hechas para el remate de las fincas de que se trata, es incuestionable, porque al quejoso podría resultar alguna cantidad á su favor, ó cubrir en su totalidad los créditos verificando el remate ó adjudicacion en pago, con arreglo á la ley vigente á la época de la cesion, no aconteceria lo mismo verificándose la enagenacion con las deducciones determinadas por la ley posterior: Considerando 2º: que aun cuando no se trate de una cesion de bienes efectuada bajo los términos y circunstancias mencionadas, bastaria para el efecto de la retroactividad, la existencia de una ó mas

hipotecas á que la finca estuviere afecta, porque el procedimiento de remate con las deducciones del Código, aunque se le llamasé procedimiento, no lo es meramente tal, puesto que en esa forma ó en esos casos ataca la naturaleza de un contrato, que siempre debe regirse con arreglo á las leyes existentes á la época en que se celebra. Considerando 3º, que no es obstáculo á la calificación de violarse el art. 14 citado, la circunstancia de tratarse de un concurso formado y seguido con arreglo á las ordenanzas de Bilbao, que disponen para el remate de los bienes del deudor, la aplicación de las leyes de procedimientos del orden común, pues por estas debían entenderse las vigentes en la época respectiva ó aquellas que sean de meros procedimientos, ó bien las que no importen infracción del Código federal que es la ley suprema; y considerando por último: que la expropiación que alega el quejoso, no puede decirse efectuada, por que la autoridad que judicialmente resuelve los puntos ó casos sujetos á la jurisdicción, no expropia en el sentido á que se refiere el art. 27 de la Constitución que invoca el quejoso; por tales consideraciones se declara: Que la justicia de la Unión ampara y protege á D. Francisco Barton, contra los procedimientos del juzgado 3º de lo civil en el remate de la fábrica de San Ildefonso y rancho anexo, efectuado con aplicación del Código de procedimientos hoy vigente, por violarse con ello la garantía individual que consigna el art. 14 de la Constitución. 2º: No se ampara ni protege al mismo quejoso con relación al art. 27, por no verificarse violación de tal garantía en el caso. Hágase saber, remítase copia de este fallo al *Diario Oficial y Semanario Judicial* y elévense los autos previa citación fiscal, á la Corte Suprema de Justicia. Lo decretó y firmó el ciudadano juez 2º de Distrito, Lic. José M.º Canalizo.—Doy fé.—*José M.º Canalizo*.—*Fernando Zamora*, secretario.

Es copia. México, Noviembre 20 de 1874.—*F. Zamora*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 30 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Sebastian Berra en representación de D. Francisco Barton, ante el juzgado 2º de Distrito de esta capital, contra los procedimientos del juez 3º de lo civil de esta ciudad, que mandó sacar á remate la Fábrica de San Ildefonso y rancho Anexo, con las deducciones del diez por ciento en cada almoneda, con arreglo á las prescripciones del Código novísimo de procedimientos, con cuyo acto, alega el quejoso, se violan las garantías que reconoce la carta fundamental de la República, en sus arts. 14 y 27, en virtud de que al dar término á sus negocios en 22 de Noviembre de 1871 y presentarse al juzgado 3º, aun no regía ni se publicaba dicho Código, y por consiguiente debían seguirse los procedimientos de la legislación vigente entonces.

Visto el informe del ciudadano juez 3º; la prueba rendida; el pedimento del ciudadano promotor fiscal; lo alegado por el quejoso y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del inferior que declaró; primero: que la Justicia de la Unión ampara y protege á D. Francisco Barton contra los procedimientos del juez 3º de lo civil en el remate de la Fábrica de San Ildefonso y rancho anexo, efectuado con aplicación del Código de procedimientos hoy vigente, por violarse con ellos la garantía individual que consigna el art. 14 de la Constitución; y segundo: que no se ampara ni protege al mismo quejoso con relación al art. 27, por no verificarse violación de tal garantía en el caso.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramírez.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 4 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido por los CC. Enrique Rubio, Matías F. Soberón y Francisco Grande, ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, contra los actos del ciudadano administrador de Rentas de esa ciudad, que les cobra el cuatro por ciento de derechos al Estado y municipales, por introducción de trescientos treinta y un tercios de mantas.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que los Sres. D. Enrique M. Rubio, Matías F. Soberón y Francisco Grande, solicitan amparo de la justicia federal, por el hecho de que al introducir el primero doscientos veintitres tercios de mantas, procedentes de la Fábrica del Hércules del Estado de Querétaro, el segundo setenta y dos tercios del mismo género de la Fábrica del Rosario del Estado de Coahuila, y el tercero treinta y seis tercios también de mantas de la Fábrica de la Aurora, situada en el Saltillo, la administración principal de rentas les exige, so-

bre todos esos efectos, el cuatro por ciento para el Estado, conforme los arts. 8º del decreto núm. 64 y 12 del núm. 75, y el municipal con arreglo á la frac. 2º del art. 2º de la ley núm. 28. Los mismos interesados, conceptuando injusto aquel cobro, creen que al exigírseles, se invade por las autoridades del Estado, la esfera de la autoridad federal, en virtud de que por el art. 72 frac. 9º de la Constitución general de la República, solo el Congreso de la Unión tiene entre otras facultades, la de impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado, se establezcan restricciones onerosas, y que por el hecho de hacer efectivo el cobro de aquellos impuestos, se infringe la ley reglamentaria de 2 de Mayo de 1868, que terminantemente dispone, que ningún Estado puede imponer bajo ninguna denominación, á los frutos de otros Estados, mayores contribuciones que las que exige á sus propios frutos.

Pedido al ciudadano administrador principal de Rentas del Estado, el informe que previene el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, se refiere en su comunicación de fojas 24 á lo mismo que expresó en caso semejante, en que dos interesados solicitaron amparo por igual causa, cuya superior resolución aun no se sabe.

Segun lo ameritado, los peticionarios solo se contraen, á que disponiéndose por el decreto núm. 35 de la actual II. Legislatura, que la Fábrica de hilados y tejidos del Venado, está exceptuada por cinco años, del pago de los impuestos á que se refieren los decretos núms. 28, 64 y 75 expedidos por la misma cámara, deben gozar de las mismas exenciones los demás frutos industriales de las fábricas de que proceden las mantas que han introducido para su consumo, supuestas las franquicias que otorga el supremo decreto de 2 de Mayo de 1868.

El ministerio ya tiene manifestado en otra vez, que grandes motivos de emulación é impulso, en favor de la industria del Estado, movieron á la II. Cámara del mis-